Taller de coyuntura

Informe quincenal de tendencias

06 de julio 2015

Una nueva prioridad en la reactivación económica

La decisión del ministerio de Hacienda de bajar la proyección del crecimiento del 3,6 % estimado para el presente año a un modesto 2,5 % (con tendencia a la baja), luego del decepcionante Imacec del mes de mayo, cayó como un balde de agua fría no tan sólo entre los agentes económicos sino en el propio mundo político que teme que este menor crecimiento y menor recaudación fiscal afecte el cumplimiento del programa y el proceso de reformas ofrecido al país, en particular la reforma educacional y las mejoras del sistema público de salud, que requieren de ingentes recursos, obligando a priorizar y graduar su implementación.

Todo ello en el marco de un agitado clima de agitación social como el que se vive en el magisterio, la movilización estudiantil, los cacerolazos en protesta por la inseguridad ciudadana, las demandas de los gremios de la salud y, en general, altas expectativas y demandas sociales imposibles de satisfacer en forma simultánea, dado el cuadro de desaceleración y menores ingresos fiscales.

Desde que asumió su cargo el nuevo titular de Hacienda ha venido insistiendo en la necesidad de contener expectativas sociales y eliminar algunos factores de incertidumbre que afectan la inversión, Sus previsiones acerca del futuro de la economía no son muy alentadoras a menos que se haga un giro importante y se ponga una mayor prioridad política en la reactivación. Varios son los factores que inciden en este proceso de desaceleración que amenaza con marcar un crecimiento ralentizado, una L en vez de una V o una U, para señalar que más que una caída y recuperación rápida (V) o una U (una curva más pronunciada para la recuperación) el país podría enfrentar un menor crecimiento a lo largo del tiempo (L).

Sin duda, un elemento central está condicionado por la situación de la economía mundial, en donde tan sólo uno de los motores de la economía internacional, EE.UU., muestra signos de activación significativos, en tanto que China y Japón muestran signos de desaceleración, al igual que lo que sucede con Europa, con excepción de Alemania. A ello se suma el fin del súper ciclo de altos precios de materias primas y la baja en las tasas de

inversión, que ha afectado a América latina y también a nuestro país, con el consiguiente impacto en el ritmo de crecimiento.

Tampoco se pueden desestimar los factores internos en este proceso de desaceleración económica. Sin lugar a dudas la crisis de credibilidad y confianza que afecta a sectores empresariales y políticos se constituye en un factor de inestabilidad, al que se agrega la natural incertidumbre que generan los procesos de reformas y la forma como se abordan, tanto por parte de sectores empresariales como de los propios agentes políticos.

Tanto la Presidenta como el propio ministro de Hacienda se han mostrado abiertos a perfeccionar y simplificar aspectos de implementación de la reforma tributaria, sin afectar la estructura ni los montos de recaudación y avanzar en un diálogo constructivo con el sector empresarial, respondiendo a la demanda de instalar una "agenda de confianza" como la demandada por este sector en la reunión con la mandataria durante la cumbre de la Alianza del Pacífico, efectuada en Perú.

La gran interrogante es que se puede hacer para enfrentar este adverso escenario. Y mientras algunos hablan de ajustes o recortes, otros piensan en políticas contra cíclicas más activas y vigorosas. Evidentemente existen restricciones para incrementar el gasto fiscal, pero existe un espacio para implementar políticas contra cíclicas para invertir en energía, infraestructura (aprovechando el mecanismo de concesiones) y fomentar créditos para la mediana y pequeña empresa, que podría contribuir a dinamizar la economía.

Todas estas medidas son necesarias pero distan de ser suficientes de no mediar un giro del sector privado de superar prejuicios y temores infundados para despejar factores de incertidumbre y empujar el proceso de reactivación económica, asumiendo, como sostenía en una reciente columna de opinión el abogado constitucionalista Javier Couso, que "las reformas actualmente en curso en Chile no representan más que un intento de mover al país desde una versión particularmente ortodoxa de economía de mercado a una versión social-demócrata de la misma". Lejos de todo populismo o experiencias revolucionarias, en condiciones no demasiado distintas en las cuales los empresarios chilenos invierten en el exterior.

Una baja sostenida en las encuestas de opinión

A la compleja situación económica y política que enfrenta el país se debe sumar una sostenida baja en las encuestas que afecta no tan sólo a la Presidenta en sus principales atributos sino al conjunto del gobierno, así como a las coaliciones e instituciones políticas y que muestran un negativo estado de ánimo y un claro rechazo a la forma en que tanto el gobierno como la oposición cumplen sus roles.

No deja de llamar la atención que algunas de las reformas emblemáticas del gobierno, en particular la reforma educacional y la propia reforma tributaria, e incluso la reforma laboral, que apuntan a mayor equidad e integración social, conciten el rechazo de una mayoría ciudadana consultada en las encuestas. Ello podría explicarse por una cierta incapacidad del gobierno y el propio oficialismo para instalar un relato comprensivo acerca del sentido de estos cambios, así como la fuerte resistencia de sectores supuestamente afectados por este proceso de reformas.

Sin embargo, buena parte de este descontento ciudadano, así como la desaprobación de la gestión de las autoridades y las coaliciones políticas, dice relación con la crisis de confianza generada por los escándalos financieros y mecanismos ilícitos de financiamiento de la actividad política que han afectado transversalmente al mundo empresarial y político. Una confianza muy difícil de restablecer de no mediar una vigorosa y activa agenda a favor de la probidad y transparencia, inserta en una clara épica, así como ejemplares sanciones para los infractores.

A la luz de las encuestas es necesario asumir que el estado de ánimo del país está muy crispado. La incertidumbre mayor frente al proceso de desaceleración económica, la sufren, más que los empresarios, los sectores más vulnerables que, frente a los fantasmas de ajustes o restricciones presupuestarias sufren una verdadera crisis en sus expectativas, ven amenazadas sus modestas conquistas y temen perder sus empleos.

Los ajustes ministeriales que marcan el segundo tiempo del gobierno

En este complejo escenario asume un nuevo equipo político en el gobierno con la incorporación de Nicolás Eyzaguirre como nuevo titular de la Secretaria General de la Presidencia, que tendrá la misión de marcar un segundo tiempo para el cual se ha demandado "una nueva hoja de ruta", un diseño que permita enfrentar las nuevas condicionantes y que permitan un giro o vuelco en la conducción del país, en donde se debe combinar un decidido avance en la agenda de probidad y transparencia, que cuenta con un amplio respaldo social y político, con una reforzada prioridad en la reactivación

económica, conjugando los avances en las reformas estructurales con una mejor gestión gubernamental y sectorial para enfrentar los problemas que constituyen las prioridades ciudadanas, en particular salud, educación, transporte y seguridad. La gestión no tan sólo está asociada a la mayor o menor idoneidad de quienes ejercen los cargos, independientemente que se requieran ajustes o cambios, sino también un desafío mayor de descentralización y modernización del Estado, que sigue constituyendo una tarea pendiente.

Sin lugar a dudas Nicolás Eyzaguirre, con una vasta experiencia técnica y trayectoria política, viene a reforzar el equipo político integrado por Jorge Burgos y Marcelo Díaz y debería constituirse en un poderoso aliado para el titular de Hacienda en sus esfuerzos por diluir las incertidumbres y desconfianzas de los sectores empresariales y apoyar sus esfuerzos por reactivar la economía. De la misma manera, el nuevo titular de la SEGPRES se convierte en un aliado natural de su sucesora en la cartera de Educación, la ministra Adriana Delpiano, con una dilatada trayectoria en el área de educación, para impulsar las reformas pendientes.

La conducción política del gobierno

El tema central que deberá abordar el gobierno en este llamado segundo tiempo dice relación con la conducción política que obviamente corresponde a la Presidenta de la República en su triple calidad de jefa de Estado, jefa de Gobierno y líder de su coalición. Pese a la sensible baja en sus niveles de apoyo y principales atributos, la mandataria representa el mayor capital político para el oficialismo y tanto sus partidarios como los propios opositores, así como el conjunto del país, esperan que la Presidenta Bachelet ejerza ese liderazgo para marcar el rumbo futuro del gobierno y señalar los caminos para superar la crisis política y la desaceleración económica.

Junto con demandar una "nueva hoja de ruta" adecuada a las nuevas condiciones que enfrenta el país, su coalición ha demandado un nuevo trato, que comprometa por igual al gobierno, los partidos y sus bancadas parlamentarios y que establezca derechos y deberes recíprocos. Precisamente a ello apunta la idea de un cónclave a desarrollarse en este mes de julio, con participación del gobierno, la coalición oficialista y las bancadas parlamentarias, y en donde deberá definirse un claro diseño para enfrentar este segundo tiempo hasta la próxima elección municipal.

Obviamente se espera que, como parte de ese diseño, el gobierno defina con claridad el tema del mecanismo para debatir las bases de una nueva Constitución establecida en el programa de gobierno y que por ahora divide opiniones al interior del propio oficialismo y en la oposición.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA FUNDACIÓN INSTITUTO IGUALDAD

(Este informe ha sido elaborado por el equipo del taller de coyuntura, pero no necesariamente representa la opinión institucional de ambas Fundaciones)